



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA

Tunja, doce (12) de septiembre de dos mil diecinueve (2019)

Medio de control: Nulidad y restablecimiento derecho

Radicado: 15001 33 33 004 **2019 00118 00**

Demandante: Jaime Bronstein Ríos

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

Ingresa el proceso con informe secretarial, para decidir lo que corresponda respecto a los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación interpuestos por el apoderado de la parte demandante.

1. ANTECEDENTES

Mediante auto de 11 de julio de 2019, se inadmitió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, al encontrar que las pretensiones no cumplían con los presupuestos establecidos en el artículo 88 del CGP para la acumulación subjetiva de pretensiones, por lo tanto, se indicó al apoderado de la parte demandante que debía pretender la nulidad del Oficio No. S-2018-068291/ANOPA-GRULI-1.10 de 21 de diciembre de 2018 expedido por la Policía Nacional o bien del Oficio No. E-00001-2019-03948-CASUR Id: 403531 de 25 de febrero de 2019 proferido por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, con el consecuente restablecimiento de derechos y, proceder a presentar una nueva demanda frente al acto del cual no se ocupe el presente proceso.

El auto que inadmitió la demanda fue notificado al apoderado de la parte demandante el 12 de julio de 2019, quien vía correo electrónico el 16 de julio del mismo año, presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, contra la decisión (fs. 112-115).

2. DEL RECURSO

El recurrente señaló que el libelo de la demanda cumple con los requisitos del artículo 88 del CGP, para la acumulación subjetiva de pretensiones y evita al Despacho la integración del litisconsorcio.

Indicó que las pretensiones provienen de una misma causa, toda vez que las entidades demandadas negaron lo solicitado, sin tener en cuenta la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los servidores públicos, debiendo tomar como ingreso base de liquidación en la escala porcentual el sueldo básico del grado de general de la República, ajustado al IPC para los años 1992 a 2004. En ese orden, concluyó que a pesar de tratarse de actos administrativos diferentes, la causa es la misma.

Sostuvo que las pretensiones tienen un único objeto y es el reajuste del sueldo básico, lo cual trae como consecuencia el reajuste de salarios, prestaciones sociales y la consecuente reliquidación de la asignación de retiro que percibe el señor Bronstein Ríos.

Frente a la relación de dependencia de las pretensiones, manifestó que la indebida liquidación del salario del demandante mientras se encontraba en servicio activo, repercute directamente en la asignación de retiro reconocida por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, por lo que señalar que no existe relación de dependencia conllevaría a una inaplicabilidad e insostenibilidad dual entre el financiamiento y el reconocimiento de las asignaciones de retiro de los miembros de la fuerza pública.

Expresó que la reliquidación del sueldo básico y el reajuste de la asignación de retiro se sirven de las mismas pruebas, pues se trata de un asunto prácticamente de pleno derecho, conforme a lo resuelto por la Corte Constitucional en sentencia C-931 de 2004, adicional a que la hoja de servicios fue el documento que sirvió de soporte a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional para el reconocimiento de la asignación de retiro devengada por el demandante.

Agregó que, de acuerdo al inciso 3.º del artículo 88 del CGP, pueden iniciarse demandas contra uno o varios demandados, aunque el interés sea diferente, y en el presente asunto el interés es el mismo, consistente en hacer extensivos los derechos reconocidos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-931 de 2004.

Finalmente, respecto al requisito de constancia de notificación de los actos administrativos demandados indicó que debían tenerse notificados por conducta concluyente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 72 del CPACA, a partir de la fecha en que se presentó la solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación.

3. CONSIDERACIONES

El artículo 243 del CPACA establece que el recurso de apelación procede contra las sentencias de primera instancia proferidas por los tribunales y los jueces, adicionalmente, contra los siguientes autos:

- “1. El que rechace la demanda.*
- 2. El que decrete una medida cautelar y el que resuelva los incidentes de responsabilidad y desacato en ese mismo trámite.*
- 3. El que ponga fin al proceso.*
- 4. El que apruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales, recurso que solo podrá ser interpuesto por el Ministerio Público.*
- 5. El que resuelva la liquidación de la condena o de los perjuicios.*
- 6. El que decreta las nulidades procesales.*
- 7. El que niega la intervención de terceros.*
- 8. El que prescinda de la audiencia de pruebas.*
- 9. El que deniegue el decreto o práctica de alguna prueba pedida oportunamente.” (Negrita del Despacho)*

A su vez, el artículo 242 *ibídem* consagra:

“ARTÍCULO 242. REPOSICIÓN. Salvo norma legal en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que no sean susceptibles de apelación o de súplica.

En cuanto a su oportunidad y trámite se aplicará lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.”

De acuerdo con la norma, el recurso de apelación procede contra los autos listados en el artículo 243 del CPACA, dentro de los cuales no se encuentra el que inadmite la demanda, por su parte, de conformidad con el artículo 242 *ibídem*, los autos que no son apelables, son pasibles de recurso de reposición, por lo tanto, el auto de 11 de julio de 2019, por medio del cual se inadmitió la demandada es susceptible únicamente de recurso de reposición.

Precisado lo anterior, en lo que atañe a la oportunidad del recurso, el numeral 2.º del artículo 244 del CPACA prevé que *“Si el auto se notifica por estado, el recurso deberá interponerse y sustentarse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes ante el juez que lo profirió. (...)”*. Ahora bien, el auto recurrido fue notificado por estado electrónico No. 32 de 12 de julio de 2019 (f. 110 vto.), comoquiera que la parte demandante presentó el recurso el día 16 de julio del año en curso, el mismo fue interpuesto oportunamente.

Ahora bien, en el auto de 11 de julio del presente año se indicó que en la demanda presentada por el señor Jaime Bronstein Ríos a través de apoderado judicial, existía una indebida acumulación de pretensiones, toda vez que no cumplían con los requisitos establecidos en el artículo 88 del CGP para la acumulación subjetiva de las mismas, al dirigirse contra dos entidades diferentes a saber, identidad de causa, identidad de objeto, relación de dependencia y que se sirvan de la mismas pruebas.

Por el contrario, el apoderado del demandante en el escrito del recurso argumentó que la demanda sí cumple con los requisitos del citado artículo 88 para la acumulación subjetiva de pretensiones.

En ese orden, para resolver el recurso de reposición interpuesto, el Despacho analizará los argumentos expuestos por el apoderado de la parte demandante frente a cada uno de los eventos establecidos en el artículo 88 del CGP, para la acumulación subjetiva de pretensiones.

Precisado lo anterior, se advierte, tal como se indicó en el auto de 11 de julio de 2019, que la demanda no versa sobre el **mismo objeto**, puesto que, de un lado, se solicita la nulidad del oficio No. S-2018-068291/ANOPA-GRULI-1.10 de 21 de diciembre de 2018, por medio del cual la Policía Nacional negó la reliquidación del salario y prestaciones del demandante con la consecuente modificación de la hoja de servicios, y de otro, del oficio No. E-00001-201903948-CASUR Id: 403531 de 25 de febrero de 2019, a través del cual la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional negó el reajuste de su asignación de retiro. En ese entendido, cada uno de los actos administrativos acusados se pronunció sobre derechos prestacionales

diferentes, por ende, en caso que se accedan a las pretensiones de la demanda, el restablecimiento de derechos subjetivos que proviene de su nulidad varía.

Por consiguiente, el argumento del apoderado de la parte demandante al sostener que el objeto es únicamente el reajuste de la asignación básica no es cierto, en tanto que cada acto se pronunció sobre aspectos diferentes de ahí que las pretensiones abarquen asuntos que van más allá de la reliquidación del salario, circunstancia suficiente para concluir que las pretensiones acumuladas no versan sobre el mismo objeto.

En línea de lo expuesto, es viable inferir que no se cumple con el requisito de provenir de una **misma causa**, pues, como quedó visto, son dos actos administrativos diferentes los que resolvieron la situación jurídica del demandante, de un lado, la reliquidación de su asignación básica, prestaciones y modificación de la hoja de servicios y, de otro, el reajuste de su asignación de retiro, de ahí que no puede tenerse por acredita esta exigencia.

No obstante lo anterior, advierte esta instancia que respecto a la exigencia de **relación de dependencia**, le asiste razón al apoderado de la parte demandante, ciertamente, los emolumentos cancelados en servicio activo al señor Jaime Bronstein Ríos se ven reflejados en la hoja de servicios que expide la Policía Nacional, con base en la cual la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional toma las partidas computables que son tenidas en cuenta para la liquidación de la asignación de retiro.

Luego, revisada la petición de 6 de diciembre de 2018 radicada ante la Dirección General de la Policía Nacional, se evidencia que dentro de sus pretensiones se encuentran la reliquidación y pago de su asignación mensual y prestaciones sociales, para los meses de enero a diciembre de 2004 y de enero de 2005 hasta su fecha de retiro, y la consecuente modificación de la hoja de servicios, aspecto que guarda relación de dependencia con la solicitud de reajuste de la asignación de retiro que se solicita en la demanda.

Justamente, en cuanto a la relación de dependencia, el Consejo de Estado en un caso en que se demandó en un mismo proceso la existencia de una relación laboral y el reconocimiento de una pensión jubilación docente —ante una sola entidad—, señaló:

*“Ahora bien, cabe indicar que las pretensiones no se excluyen entre sí como lo señaló el a-quo, **toda vez que la consistente en el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, es conexas, dependiente y consecencial a la prosperidad del reconocimiento de la existencia de la relación laboral y sus efectos prestacionales, por lo que en principio podrían ser objeto de acumulación al reunirse los requisitos señalados en el artículo 165 del CPACA.**”¹*

Así entonces, pese a que en el presente asunto se trata de una acumulación subjetiva de pretensiones y no objetiva, toda vez que la demanda se dirige contra

¹ CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN SEGUNDA. Auto de siete (7) de abril del dos mil dieciséis (2016). Rad. No. 70001-23-33-000-2013-00324-01(2300-14). C. P. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ.

dos entidades diferentes, se advierte que las pretensiones guardan relación de dependencia, en tanto que la modificación de la hoja de servicios que se desprende del reajuste los haberes devengados en servicio activo, en caso de quiere hubiere lugar a ello, es consecuencial a la reliquidación de la asignación de retiro.

Finalmente, en cuanto al requisito de que **se sirvan de las mismas pruebas**, el Despacho evidencia que este no se cumple, en tanto que de cada acto administrativo se desprenden derechos diferentes por lo que las pruebas que sirven para su comprobación son disímiles, a manera de ejemplo, mientras que frente a la pretensión de reliquidación del salario, prestaciones sociales y modificación de la hoja de servicios habrá que examinar los desprendibles de nómina para determinar si los haberes devengados en servicio activo fueron debidamente liquidados, respecto a la asignación de retiro debe revisarse la hoja de servicios y las partidas computables que sirvieron de base para su liquidación.

En ese orden, pese a que las pretensiones del demandante pueden tener un mismo sustento normativo relacionado con la escala gradual porcentual que determina el valor de cada prestación, como lo sostuvo el apoderado de la parte demandante, lo cierto es que a partir dicha circunstancia no puede asegurarse que tanto la reliquidación de la asignación básica y demás prestaciones, como la de la asignación de retiro, se sirvan de las mismas pruebas.

De acuerdo a lo expuesto hasta ahora, se infiere que las pretensiones formuladas por el señor Jaime Bronstein Ríos contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional cumplen con uno de los cuatro requisitos establecidos en el artículo 88 del CGP para la acumulación subjetiva de pretensiones, concretamente, la relación de dependencia.

Respecto a los requisitos para la acumulación subjetiva de pretensiones, el Consejo de Estado ha señalado:

*“El citado artículo 88 es claro al señalar **las hipótesis en las que es procedente que varios demandantes acumulen sus pretensiones en una misma demanda**, entre ellas: cuando provengan de la misma causa, cuando versen sobre el mismo objeto, cuando se hallen entre sí en relación de dependencia o cuando deban servirse de unas mismas pruebas.*

(...)

*En ese orden de ideas, **el accionante no demostró que el asunto a acumular se encontrara inmerso dentro de una de las causales de acumulación subjetiva de pretensiones** y la decisión del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Bucaramanga no incurrió en defecto procedimental absoluto (...)”²*

Conforme al pronunciamiento en cita, es viable inferir que la acumulación subjetiva de pretensiones de que trata el artículo 88 del CGP procede por cualquiera de las causales listadas en la norma, sin que sea necesaria la concurrencia de todas

² CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA. Sentencia de tutela de ocho (8) de septiembre de dos mil dieciséis (2016). Rad. No. 68001-23-33-000-2016-00644-01(AC). C. P. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ.

ellas. En el mismo sentido, la doctrina se ha referido a los requisitos para la acumulación subjetiva de pretensiones, ciertamente el tratadista Hernán Fabio López Blanco sostiene que:

“Dado que la integración del Litis consorcio facultativo que surge de la permisión de lo previsto en lo antes transcrito obedece a las más que disímiles causas, porque los eventos contemplados por la norma que la permiten no son concurrentes, puesto que basta que se dé alguna de esas circunstancias para que sea posible la acumulación, teóricamente se podría afirmar que es viable siempre que lo quiera el demandante porque podría encontrar la base para la conexión en cualquiera de esos diversos aspectos ejemplo, la comunidad de la prueba, la eventual relación de dependencia.”³ (Subraya del Despacho)

Así las cosas, con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios expuestos, bajo una interpretación exegética del pluricitado artículo 88 que consagra “*en cualquiera de los casos*”, no se es necesario acreditar la totalidad de los requisitos para la acumulación subjetiva de pretensiones, bastando, para el efecto, el cumplimiento de la exigencia relacionada con la relación de dependencia de las pretensiones acumuladas, interpretación que, a su vez, garantiza el ejercicio del derecho de acción del demandante que hace parte del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia.

De otro lado, en lo que atañe a la causal de admisión señalada en el auto de 11 de julio de 2019, referente a la constancia de notificación de los actos administrativos acusados, conforme lo dispone en artículo 166 del CPACA, el apoderado de la parte demandante indicó que deben tenerse por notificados conforme al artículo 72 *ibídem*, norma que señala:

“ARTÍCULO 72. FALTA O IRREGULARIDAD DE LAS NOTIFICACIONES Y NOTIFICACIÓN POR CONDUCTA CONCLUYENTE. Sin el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por hecha la notificación, ni producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada revele que conoce el acto, consienta la decisión o interponga los recursos legales.”

Así, entonces, puede deducirse que el apoderado de la parte demandante adujo que los actos administrados demandados fueron indebidamente notificados, razón por la cual deben entenderse notificados por conducta concluyente. En cuanto a la indebida notificación de los actos administrativos y el estudio de admisión de la demanda, el Consejo de Estado ha sostenido que:

*“Así las cosas, teniendo en cuenta que la indebida notificación de una decisión administrativa alegada por la accionante debe ser estudiada detenidamente, por cuanto como se dijo antes, el incumplimiento de alguno de los requisitos de la notificación personal invalida la misma y en aras del derecho al acceso a la administración de justicia, **considera la Sala que la presente demanda no debió ser rechazada de plano, sino admitirse para***

³ LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Código General del Proceso – Parte General, edición 2019. Dupre Editores, pág. 517.

que dentro del trámite del proceso se pudiera verificar si en efecto, fue presentada fuera del término de caducidad.”⁴

De acuerdo a lo anterior, debido a que el apoderado de la parte demandante en el recurso hizo alusión al artículo 72 del CPACA, que refiere a la irregularidad en la notificación de los actos administrativos por incumplimiento de los requisitos legales para tal fin, el Despacho advierte que dicha situación da lugar a que la demanda sea admitida en esta etapa procesal, no obstante, durante el curso del proceso habrá lugar a determinar si frente a todas y cada una de las pretensiones, el medio de control fue interpuesto dentro del término legal.

Así las cosas, en aras de garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia del señor Jaime Bronstein Ríos, el Juzgado repondrá el auto de 11 de julio de 2019 y, en su lugar, admitirá la demanda incoada contra la Nación – Ministerio de Defensa Ejército Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Tunja,

RESUELVE

PRIMERO.- Reponer el auto de 11 de julio de 2019, por medio del cual se dispuso la inadmisión de la demanda, según las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, **admitir** la presente demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en primera instancia, formulada a través de apoderado, por el señor Jaime Bronstein Ríos contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.

TERCERO.- Notificar personalmente del contenido de esta providencia a los representantes legales de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, de conformidad con los artículos 197 y 199 del CPACA, modificado por el artículo 612 del Código General del Proceso, mediante mensaje dirigido al buzón de correo electrónico para notificaciones judiciales dispuesto para tal efecto por la entidad, anexando copia de esta providencia y de la demanda. Póngaseles de presente que las copias de la demanda y sus anexos quedarán en la Secretaría del Despacho a su disposición. Hecha la notificación, por Secretaría remítaseles, de manera inmediata, y a través de servicio postal autorizado, copia de la demanda, de sus anexos y del auto admisorio.

CUARTO.- Notificar personalmente el contenido de esta providencia al señor agente del Ministerio Público delegado ante este Despacho Judicial y a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, de conformidad con los artículos 197 y 199 del CPACA, modificado por el artículo 612 del Código General del

⁴ CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN SEGUNDA. Auto de siete (7) de abril de dos mil dieciséis (2016). Rad. No. 23001-23-33-000-2014-00442-01(0854-15). C. P. GERARDO ARENAS MONSALVE.

Proceso, mediante mensaje dirigido al buzón de correo electrónico para notificaciones judiciales dispuesto para tal efecto por la entidad, anexando copia de la presente providencia y de la demanda.

QUINTO.- Notificar del contenido de esta providencia al demandante y a su apoderado de conformidad con el artículo 201 del CPACA.

SEXTO.- La parte actora deberá sufragar los gastos de notificación, consignando la suma de **DIECIOCHO MIL PESOS (\$ 18.000) M/CTE**, que corresponde a los siguientes conceptos:

CONCEPTO	VALOR
Envío a través del servicio postal autorizado de copia de la demanda, anexos y auto admisorio a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.	\$9.000
Envío a través del servicio postal autorizado de copia de la demanda, anexos y auto admisorio a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR.	\$9.000
TOTAL	\$18.000

En cumplimiento a lo dispuesto en la Circular DEAJC19-43 de 11 de junio de 2019, proferida el Director Ejecutivo de Administración Judicial, dicho valor deberá ser consignado en el Banco Agrario de Colombia, cuenta corriente **Nº 3-082-00-00636-6** “CSJ-DERECHOS, ARANCELES, EMOLUMENTOS Y COSTOS-CUN” y acreditar su pago ante la Secretaría del Juzgado, dentro de los cinco (05) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia. Si al vencimiento del plazo previsto en el artículo 178 del CPACA, no se acredita el pago de los gastos procesales, se entenderá que los demandantes han **desistido** de la demanda y se procederá de conformidad con lo establecido en el precitado artículo.


SÉPTIMO.- Cumplido lo anterior córrase traslado de la demanda, conforme lo dispuesto en el artículo 172 del CPACA, a la demandada y al Ministerio Público, por el término de treinta (30) días, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 199 *ibidem*, modificado por el artículo 612 del Código General del Proceso, comenzará a correr veinticinco (25) días después de realizada la última notificación, para que **contesten la demanda y alleguen con esta todas las pruebas que tengan en su poder y que pretendan hacer valer dentro del proceso, así mismo, se deberá allegar la totalidad del expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto de éste proceso donde figura como demandante el señor Jaime Bronstein Ríos identificado con C.C. 14.237.966, y que se encuentren en su poder, la omisión de éste deber constituye FALTA DISCIPLINARIA GRAVÍSIMA** del funcionario (a) encargado (a) del asunto, al tenor de lo dispuesto en el artículo 175, parágrafo primero del CPACA. También, deberán allegar copia auténtica de los documentos que acrediten la calidad de representante legal de la entidad o entidades demandadas de conformidad con lo establecido en el artículo 159 *ejusdem*.

OCTAVO.- Reconocer personería al abogado Juan Carlos Arciniegas Rojas, identificado con C.C. Nº 93.126.025 y T.P. Nº 323.375 del C. S de la J., para

121

actuar como apoderado judicial de la parte demandante, en los términos del poder especial visto a folio 68 del expediente.

Notifíquese y cúmplase


ÁNGELA MARÍA JOJOA VELÁSQUEZ
Juez

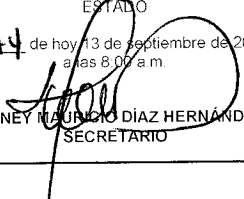
⁵_{CQ}

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE
ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA

NOTIFICACIÓN POR ESTADO

LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR
ESTADO

N° ~~44~~ de hoy 13 de septiembre de 2019
a las 8:00 a.m.


FERNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO

⁵ Esta providencia fue notificada en estado electrónico el 13 de septiembre de 2019 en la página web www.ramajudicial.gov.co. FERNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ– Secretario